

LA REVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AGRARIO, China

Rafael Poch de Feliu

El presidente chino, Hu Jintao, y la llamada "cuarta generación de dirigentes" recibieron hoy más poder y margen de maniobra para acometer cambios en China, el país en desarrollo mayor del mundo en población. El patriarca Jiang Zemin, les cedió el último de sus cargos; la presidencia de la Comisión Militar Central, lo que no significa que Jiang vaya a desaparecer de la escena. Más allá de la intriga y de la crónica palaciega, la noticia de China no está en los relevos de figuras. En China, el poder cada vez es más colectivo y menos personal. La noticia está, sobre todo, en sus cambios de fondo, presididos por el mayor proceso de urbanización de la historia. La apenas noticiada, abolición del impuesto agrario, es mucho más relevante, desde todos los puntos de vista, que las quinielas políticas de Pekín.

Lanzou/Yinchuan (China occidental).- Anunciada en marzo por el primer ministro Wen Jiabao, y contemplada en el llamado "Documento número uno" de este año, que lleva por título: "Dar más, exigiendo menos", la abolición del impuesto agrario es, sin duda, la decisión más relevante adoptada por las autoridades chinas desde que la "cuarta generación" accedió al poder en Pekín, a partir de otoño del 2002. Es una "revolución desde arriba" que está siendo recibida como una ducha de agua fría por la burocracia de provincias pobres como Gansú y regiones como Ningxia, 1500 kilómetros al oeste de Pekín.

La medida afecta directamente a 800 millones de campesinos, un colectivo raramente noticiable, que forma la mayoría social de desfavorecidos por los cambios de los últimos años en este país.

Se trata de abolir en cinco años el impuesto agrario, de entre el 6% y el 7% de la producción, que se calcula según el número de bocas de la familia campesina y la superficie de tierra que ésta cultiva. El plan es reducirlo un punto cada año hasta su desaparición. Se considera que en tres años, los costos de recaudación ya superarán al propio impuesto, por lo que los cinco años podrían quedar en dos o tres. Además, todos los productos de la agricultura especializada a excepción del tabaco, quedan exentos de impuestos.

La medida es mucho más que una subvención indirecta a los más pobres, porque el "modus vivendi" de todo un ejército de burócratas provinciales reposa sobre ese y otros impuestos del mismo estilo, lo que convierte una medida fiscal en un incentivo para la democratización y modernización de la administración local.

"Nuestra provincia va a aplicar esta directiva del gobierno central con cierta flexibilidad", explica en Lanzhou, Qiang Hongbing, vicedirector del departamento de agricultura de Gansú, una provincia árida y pobre (la quinta por la cola entre 33) de 26 millones de habitantes en China occidental. El trato con el gobierno es que este abonará el 80% de los ingresos que Gansú deje de

recaudar en impuestos, "el 20% restante es asunto nuestro", dice el funcionario.

Una de las soluciones es reducir junto con el impuesto el número de funcionarios que viven de él. Para ello, explicó Qiang en una cena con éste corresponsal, se piensa reducir en un 20% la burocracia de la provincia. El procedimiento será reducir el número de municipios mediante fusiones, de forma que unos absorban a otros.

"No podemos empujar mucho, porque muchos funcionarios quedarían sin trabajo", dice.

En Yinchuan, capital de Ningxia, la región autónoma contigua, Li Jiping, el jefe del departamento homólogo al de Qiang, calcula que los campesinos dejarán de pagar a partir de ahora entre 30 y 40 millones de yuanes (3/4 millones de euros) por año. Es una fortuna, si se tiene en cuenta que de los 5 millones de habitantes de Ningxia, 710.000 son campesinos que viven con menos de 87 euros... al año.

En marzo del 2000, Li Changping, entonces un secretario del partido en una pequeña localidad de provincias, se hizo famoso en China al escribir una carta abierta al primer ministro Zhu Rongji. La carta empezaba diciendo; "le escribo con lágrimas en los ojos, la vida de los campesinos es enormemente dura, las comunidades rurales enormemente pobres y el estado de la agricultura extremadamente precario". Li explicaba que el 80% de los campesinos de su distrito perdían dinero trabajando, a causa de la política de precios, el abuso fiscal y la corrupción. En 14 años, el número de funcionarios de su localidad había pasado de 15 a 300, en su mayoría viviendo del campesino, explicaba. La burocracia local ignora las directivas del gobierno central, afirmaba. "Los intereses de los funcionarios han degenerado hasta tal punto, que ya es imposible reconciliarlos con los de la gente común", decía Li.

La carta fue un revulsivo que sensibilizó a las autoridades sobre el potencial desestabilizador de la cuestión agraria, lo que los chinos denominan "los tres nong" (nongmin, nongcun y nongye), es decir; campesinos, aldea y agricultura. Li escribió un libro titulado "Le dije la verdad al primer ministro Zhu" que fue best seller, pero dimitió de su cargo en el partido y actualmente trabaja como editor en Pekín.

En los orígenes de la nueva China, la comuna popular maoísta acabó con el latifundismo. Su tazón de arroz acabó también con el hambre, la manifestación más cruda del estigma de la miseria secular que llevan en los genes los campesinos chinos. Pero, solucionado ese histórico problema, con el tiempo, el campesino quedó asfixiado por la administración estatal. A finales de los setenta, la liberalización de Deng Xiaoping y el establecimiento de los contratos familiares, transformaron el panorama rural. Veinticinco años después, el sistema impositivo rural creado en China produce una asfixia semejante, señalan los expertos.

La única diferencia es que los campesinos de hoy pueden trabajar fuera de sus pueblos y mantener actividades comerciales, siempre marcados por un ejército de funcionarios ávidos de impuestos.

La razón de la explotación impositiva es que la descentralización acometida en China en los últimos veinte años permitió a los gobiernos locales quedarse los ingresos que recaudaban, una vez superaran una suma determinada. Los gobiernos locales recibieron así un fuerte incentivo para incrementar la presión fiscal y con el tiempo proliferaron centenares de impuestos agrícolas, cuyo sentido último era, explica un experto, "resolver la vida y comodidades de los funcionarios del gobierno".

En los últimos años, el gobierno central acometió tres reformas de la administración local, a nivel de población y aldea, enfocadas hacia la reducción de la burocracia, de departamentos y a la mejora de la función pública, pero la burocracia local las anuló. Quedaron en nada.

Al mismo tiempo, desde 1987 existe en China un sistema de elección directa de las autoridades locales que queda descafeinado por el sistema económico de "funcionarios explotando a campesinos" en el que está inserto. No es de extrañar que la burocracia local figure, frecuentemente, como primer adversario de la aplicación real de esa democracia de bajo nivel, que afecta a más de 600.000 localidades y 900 millones de chinos.

Aunque el estado de esa "democracia de base" no admite descripciones generales simplistas, la colisión entre campesinos y burócratas es muy frecuente. El 20 de febrero, 200 vecinos de la aldea de Dazhu del distrito Ninghai de la provincia de Zhejiang estaban eligiendo a sus autoridades cuando la policía irrumpió en el local rompió las urnas y dispersó a los vecinos. Una semana antes, estos habían destituido a su anterior jefe de aldea, de acuerdo con la ley.

En un distrito de la provincia de Hubei, un observador reveló que las autoridades habían destituido a 187 jefes de aldea legítimamente electos, y estimaba que sólo en una quincena de los 354 pueblos las elecciones locales podían considerarse democráticas.

Hoy, Li Changping opina que la abolición del impuesto agrario, "supone el final de la era del sistema de "gobierno mantenido por campesinos".

"En el campo, el sistema impositivo no es solo la razón de ser de la burocracia, sino también su *modus vivendi*", dice. La feroz oposición de la burocracia provincial a la democracia local, viene de ahí, pues lo primero que hace una comunidad local democráticamente organizada es quejarse de los abusos e intentar remediarlos. Ahora, dice Li, la abolición del impuesto y, con el, del sistema que lleva consigo, abre perspectivas reales para la democratización local, entendida en su sentido más amplio; desde la mejora de los servicios, hasta el sistema de decisiones y su orientación social. Las autoridades del gobierno central quieren desarrollar esas tendencias porque saben que la actual y creciente desigualdad de China es insostenible.

En los últimos veinte años, las diferencias de ingresos entre chinos urbanos y rurales se ha incrementado en casi cinco veces, según la cuenta oficial. Pese a los muchos éxitos de China en progreso general y en salida de la pobreza en particular, 800.000 chinos ingresaron el año pasado en el colectivo considerado pobre, según fuentes oficiales.

Las cifras absolutas de este ejército de pobres es de los más variado; 29 millones es la cifra oficial, según un criterio basado en un ingreso mínimo anual calculado en yuanes, 113 millones según el primer ministro Wen Jiabao, que incluye en la cuenta a otros dos colectivos precarios, los parados urbanos y los discapacitados o inválidos, y, finalmente, más de 200 millones (17% de la población, en 1999) según el Banco Mundial, que utiliza otro baremo de ingresos mínimos.

Una encuesta realizada por un instituto pekinés entre un centenar de académicos ha revelado este mes que el 66% de ellos espera abundancia de manifestaciones de descontento social antes del 2010. En el campo, uno de los principales escenarios de inestabilidad, el abuso fiscal y la corrupción son la primera causa de descontento.

[La Vanguardia](#). España, septiembre del 2004.